

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI

Santiago de Cali, Octubre veintidós (22) de dos mil veintiuno (2021)

Auto de Sustanciación No. 532.-

Proceso N°: 76001-33-33-**018-2021-00212-00**
Demandante: JORGE ANDRÉS ÁLVAREZ LÓPEZ
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL
"ALCALDÍA DE CALI – SECRETARIA DE MOVILIDAD"
Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA

El señor Jorge Andrés Álvarez López, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, instaura demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la *"Alcaldía de Cali – Secretaría de Movilidad"*, con el fin que se declare administrativamente responsable de los perjuicios materiales e inmateriales causados al demandante como consecuencia de que fue presuntamente sufrió accidente causado por unos guardias de tránsito y que posteriormente agredido por policías, concretamente al ser *"derribado de su motocicleta en movimiento, agredido de manera injustificada, y se omitió prestarle atención básica de primeros auxilios y remitirlo a un centro asistencial, agresión que fue cometida por agentes de la Policía Nacional y agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de la Alcaldía de Cali"*.

Es bien sabido que el artículo 228 de la Constitución Política, señala que la administración de justicia es una función pública y sus decisiones son independientes, sin embargo, el acceso a la misma tiene ciertos límites *v.gr.* exigir el agotamiento previo de la vía administrativa, la observancia de determinados requisitos de técnica jurídica, o el cumplimiento deberes tendientes al recaudo probatorio, es por ello que las cargas procesales suponen una actuación **potestativa** del sujeto procesal a quien se le impone y de no cumplirse podría acarrear resultados desfavorables, ya que habitualmente son establecidas en interés del propio sujeto a quien se las impone la ley, y este conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el juez pueda obligarlo a ello.

Revisada la demanda, se advierte que deberá ser inadmitida por las siguientes razones:

Del cumplimiento de los Requisitos Formales

1. De los hechos

La parte actora deberá adecuar los hechos de forma clara, cronológica y detallada sobre el tema objeto de litigio, dirigidos a revelar la verdad material sobre el asunto,

omitiendo apreciaciones subjetivas, y estableciendo plenamente cuál es el régimen de responsabilidad bajo el cual se pretenden las condenas a favor del demandante, teniendo en cuenta que el medio de control de reparación directa en el artículo 140 del CPACA, refiere que, se demanda por el daño antijurídico producido por la acción u omisión de la administración.

2. Estimación Razonada de la Cuantía

Es menester indicar que la parte actora deberá estimar razonadamente la cuantía en los términos previstos en el numeral 6° del artículo 162 del C.P.A.C.A., toda vez que la estima en la suma de \$153.630.719, sin tener en consideración que en el presente medio de control cuando se soliciten perjuicios morales e inmateriales, la cuantía se estima respecto de los materiales, sin considerarse los morales, salvo que sean los únicos que se soliciten.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 155 numeral 6 y 157 del C.P.A.C.A, la competencia por razón de la cuantía, en el medio de control de reparación directa, se determina por el valor de los perjuicios causados, estimados en forma razonada en la demanda, de los que se desprende que, si en el libelo introductorio se incoan varias pretensiones, preciso será tomar de aquellas la de mayor monto individualmente considerada advirtiendo que no se pueden contabilizar los perjuicios morales, salvo que sean los únicos que se soliciten.

De otro lado en cuanto a los perjuicios morales solicitados, debe señalarse que los mismos deben atemperarse a lo dispuesto en las sentencias unificadoras de criterio proferidas por el H. Consejo de Estado, las cuales de acuerdo con su gravedad se estiman bajo los parámetros señalados por el Alto Tribunal en cita.

Adicionalmente es menester indicar que, la categoría de daño a la vida de relación y daño fisiológico han sido subsumidas frente a la nueva categoría de daño a la salud, así las cosas, de una correcta interpretación de las pretensiones de la demanda, estima este operador judicial que la denominación de perjuicios *“Indemnización por daño a la vida de relación o alteración a sus condiciones de existencia (...)”* que utilizó la parte demandante se encuentra relacionada o ajustada con lo que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado anteriormente denominada daño a la vida de relación, perjuicios fisiológicos, alteración grave a las condiciones de existencia y, en la actualidad, **denominado daño a la salud**, así lo sostiene al manifestar:

“(...) De modo que, el “daño a la salud” –esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psicofísica– ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

Se reconoce de este modo una valoración del daño a la persona estructurado sobre la idea del daño corporal, sin tener en cuenta categorías abiertas que distorsionen el

modelo de reparación integral. Es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica sólo podrá reclamar los daños materiales que se generen de esa situación y que estén probados, los perjuicios morales de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la Sala y, por último, el daño a la salud por la afectación de este derecho constitucional.

Lo anterior, refuerza aún más la necesidad de readoptar la noción de daño a la salud, fisiológico o biológico, como lo hace ahora la Sala, pero con su contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectación o limitación a la integridad psicofísica de la persona, como quiera que al haberlo subsumido en unas categorías o denominaciones que sirven para identificar perjuicios autónomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como por ejemplo la alteración a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se modificó su propósito que era delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad¹.

En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia -antes denominado daño a la vida de relación- precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud.”*(Se destaca fuera del texto original).*

Teniendo en cuenta lo expuesto, el daño fisiológico pasó al de daño a la vida de relación, para luego acoger el de alteración grave a las condiciones de existencia, el cual acaba de ser reemplazado por el de daño a la salud, así pues, el derecho a la salud concentra todas las categorías dispersas que se indemnizaban bajo el concepto anterior de alteración grave de las condiciones de existencia y se fijan unos parámetros a indemnizar.

Por todo lo anteriormente expuesto, la parte actora deberá precisar la cuantía y pretensiones de la demanda conforme lo señalado por el Despacho.

3. Del extremo pasivo

Refiere la parte actora que la demanda se presenta respeto de la Nación- Ministerio de Defensa-Policía Nacional y contra la Alcaldía de Cali-Secretaría de Movilidad.

Atendiendo a lo anterior, se debe señalar que tanto la Alcaldía de Cali como la Secretaría de Movilidad carecen de personería jurídica para ser parte dentro del presente proceso, pues quien tiene la capacidad para ser parte en el asunto es el Distrito Especial de Santiago de Cali, ente territorial, que posee personería jurídica² para ser demandado en el presente asunto, de tal suerte que deberá determinar con precisión el extremo pasivo en el escrito de subsanación.

¹ “El daño subjetivo o daño a la persona es aquél cuyos efectos recaen en el ser humano, considerado en sí mismo, en cuanto sujeto de derecho, desde la concepción hasta el final de la vida. Por la complejidad del ser humano, los daños pueden efectuar alguna o algunas de sus múltiples manifestaciones o “maneras de ser”. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos “El daño a la persona”, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 71 y s.s.

² Ley 153 de 1887, artículo 80. ART 80. “La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas ó reconocidas por la ley, son personas jurídicas”.

4. Deberes de las partes en virtud del Decreto 806 de 2020 en consonancia con el artículo 78 del C.G.P

Conforme a lo previsto en el Decreto 806 del 04 de junio de 2020, artículos 3º y 6º, los sujetos procesales deberán asistir al proceso en uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y para el cumplimiento de dicho fin, las partes deberán suministrar a la autoridad judicial y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para el impulso del trámite procesal (correos electrónicos de las partes y apoderados y demás medios) y enviarán a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, con copia incorporada al mensaje a la autoridad judicial, ello en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 162 del C.P.A.C.A. y los mandatos establecidos en los numerales 5, 6 y 14 del artículo 78 del C.G.P., cuya **omisión a este deber conlleva a la inadmisión de la demanda**, y de acuerdo con la constancia secretarial que antecede, no hay evidencia de que la parte actora hubiere enviado la demanda y sus anexos a las entidades demandadas a través de su correo electrónico tal como lo prevé el decreto referenciado el cual entró en vigencia el día 04 junio de 2020 y la demanda fue impetrada el día 08 de octubre de 2021.

Lo que impone a la parte actora, el deber de enviar la demanda y sus anexos al correo electrónico del extremo pasivo y a la Agente del Ministerio Público delegada para este Despacho, con copia incorporada al mensaje a la autoridad judicial, pues la demanda se presentó obviando lo ordenado en el decreto referido, ya que se impetro directamente ante la oficina de reparto sin poner en conocimiento la misma al extremo pasivo.

Conviene aclarar que si bien para el momento de radicación de la demanda, la parte actora no tenía conocimiento de la dirección electrónica del agente del Ministerio Público, en esta instancia si es exigible y por tal razón se pondrá en conocimiento el correo de la Procuraduría 60 Judicial I Delegada para este Juzgado.

5. De los correos electrónicos registrados por los apoderados de la parte actora

El Despacho encuentra oportuno manifestar que, una vez consultado el Registro Nacional de Abogados - SIRNA, el día 20 de octubre de 2021, no aparece inscrito el correo electrónico del abogado José Yesid Gómez Moreno gomezmjy@yahoo.com en el Registro Nacional de Abogados, tal como se puede evidenciar a continuación:

# CÉDULA	# TARJETA/CARNÉ/LICENCIA	ESTADO	MOTIVO NO VIGENCIA	CORREO ELECTRÓN
16723498	88896	VIGENTE	-	-

Lo anterior, denota un incumplimiento del deber de registrar y/o mantener actualizados sus datos en dicho registro, tal y como lo señaló el Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020 numeral 6º, el cual refiere que los abogados litigantes, deberán registrar y/o actualizar su cuenta de correo electrónico, con el fin de facilitar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus gestiones ante los despachos judiciales, con posterioridad el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA20-11567 del 05 de junio de 2020, artículo 31 reiterando lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11532 al señalar: “Los abogados litigantes inscritos en el Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la

Judicatura deberán registrar y/o actualizar su cuenta de correo electrónico, de conformidad con las directrices que emita el Consejo Superior a través de la Unidad de Registro Nacional de Abogados”.

Por su parte, el abogado Vladimir A. Estrella Torres, quien se encuentra inmerso dentro del poder en calidad de abogado sustituto, aparece en el Registro Nacional de Abogados³ con el siguiente canal electrónico:

DULA	# TARJETA/CARNÉ/LICENCIA	ESTADO	MOTIVO NO VIGENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
1167	86821	VIGENTE	-	VLADIMIRESTRELLA@GMAIL.COM

1 - 1 de 1 registros

◀ anterior

1

siguiente ▶

Así pues, el Juzgado notificará todas las actuaciones que se surtan en el presente asunto, al correo del apoderado sustituto Dr. Estrella Torres, el cual sí aparece inscrito en el Registro Nacional de Abogados **VLADIMIRESTRELLA@GMAIL.COM**, con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, el debido proceso, y el principio de publicidad de las actuaciones, **sin perjuicio de que el apoderado principal en el presente asunto cumpla con lo de su cargo, y proceda a registrar la correspondiente dirección electrónica para efectos de notificaciones en el Registro Nacional de Abogados**, una vez cumpla con su deber, deberá comunicarlo al Despacho en el escrito de subsanación de la demanda, y a partir de ese momento el Despacho procederá a notificarle las actuaciones al correo electrónico que plasme en el Registro Nacional de Abogados.

Soporte Jurisprudencial

En relación a la oportunidad que tiene el juez para exponer las falencias de la demanda, el H. Consejo de Estado ha sostenido:

‘El artículo 103 de la Ley 1437, expresamente dispone que “los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico ”.

“Por su parte, el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil prescribe que “el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”, lo que se refleja en el deber consagrado en el numeral 1 del artículo 37 ibidem de “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”.

“En virtud de la finalidad del proceso judicial —la efectividad de los derechos— el juez goza de amplias potestades de saneamiento, en aras de que el proceso se ritúe conforme al procedimiento legal y se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento de los presupuestos de validez y eficacia del proceso, potestades de las que puede hacer uso en cualquier etapa del mismo, por ejemplo, al momento

³ Consultado el día 20 de octubre de 2021.

de estudiar la demanda para su admisión o en la audiencia inicial, etapa procesal en la cual, acorde con lo dispuesto en el artículo 180.5 de la Ley 1437, el juez, de oficio o a petición de parte, debe decidir los vicios que se hayan presentado y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.

‘Así, la facultad de saneamiento le impone al juez la obligación de revisar la regularidad del proceso, la existencia de irregularidades o vicios y subsanarlos, para que el proceso pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito.

"4.2.2. La potestad-deber del juez de sanear el proceso en cada etapa procesal se funda en la regla contenida en el artículo 25 de la Ley 1285, según la cual "agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarreen nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas", salvo aquellas otras irregularidades que 'comporten una grave afectación del núcleo esencial de las garantías constitucionales de las cuales son titulares los sujetos procesales', de acuerdo con la Sentencia C-713 de 2008 que declaró exequible el artículo 25 de la Ley 1285.

"(...).⁴ (destaca)

En este sentido, habrá de inadmitirse la demanda conforme lo dispone el artículo 170 del C.P.A.C.A., con el objeto de que subsanen las falencias descritas, **CONSOLIDANDO LA DEMANDA Y SU SUBSANACIÓN EN UN SOLO DOCUMENTO EL CUAL DEBE SER PLENAMENTE LEGIBLE.** Así pues, el apoderado de la parte actora deberá remitir el escrito de subsanación de la demanda, al correo electrónico institucional del Juzgado adm18cali@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el término señalado en el artículo 170 del C.P.A.C.A. acatando lo dispuesto en los artículos 103 y 162 del C.P.A.C.A., modificado y adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 y los mandatos establecidos en los numerales 5, 6 y 144 del artículo 78 del C.G.P.

En consecuencia, el Juzgado,

DISPONE:

PRIMERO: Inadmitir la demanda de la referencia.

SEGUNDO: Conceder a la parte actora un término de diez (10) días para que subsane las anomalías anotadas, so pena del rechazo de esta. (Art. 170 CPACA).

TERCERO: Informar a los sujetos procesales que las comunicaciones, memoriales, pruebas documentales e intervenciones en el presente asunto, se recibirán en la dirección electrónica del despacho adm18cali@cendoj.ramajudicial.gov.co previa citación de la radicación del proceso.

⁴ Auto 2012-00173 de septiembre 26 de 2013 CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN CUARTA Rad: 08001-23-33-004-2012-00173-01 (20135) Consejo Ponente: Dr. Jorge Octavio Ramírez.

CUARTO. Bajo éstas circunstancias se comunica que las providencias se ingresan en la página de la Rama Judicial, <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-18-administrativo-de-cali>.

QUINTO. Instar a la parte actora a remitir el ejemplar del memorial que se presente ante el Despacho a la parte contraria, a las respectivas direcciones electrónicas o medio equivalente. Advertir que el incumplimiento del deber mencionado conlleva sanciones pecuniarias (numeral 14 del artículo 78 del C.G.P.).

SUJETO PROCESAL	DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
Parte Demandante	VLADIMIRESTRELLA@GMAIL.COM
Parte demandada Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Distrito Especial de Santiago de Cali	DEVAL.NOTIFICACION@POLICIA.GOV.CO NOTIFICACIONESJUDICIALES@CALI.GOV.CO
Procuraduría delegada ante este despacho	VAGREDO@PROCURADURIA.GOV.CO

SEXTO. Reconocer personería para actuar al abogado Vladimir A. Estrella Torres, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.400.167 y titular de la Tarjeta Profesional No. 86.821 del Consejo Superior de la Judicatura, y al abogado José Yesid Gómez Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.723.498 y titular de la Tarjeta Profesional No. 88.896 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderados de la parte demandante en el presente asunto en los términos señalados en el memorial de poder visible en la paginas 16 y 17 del archivo No. 003 del exp. digital, haciéndoles la salvedad que no podrán actuar simultáneamente conforme lo dispuesto en el artículo 75 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
HERVERTH FERNANDO TORRES OREJUELA
Juez

Firmado Por:

Herverth Fernando Torres Orejuela
Juez
Juzgado Administrativo
018
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e952ea2e77f1f76fd4446ba3c37063e8f92f2c5c42e370de1550c910212d1054
Documento generado en 22/10/2021 09:14:49 AM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**